

# LA POLÍTICA MINERA EN LA ARGENTINA Y EL MODELO EXTRACTIVISTA

MARÍA DEL PILAR BUENO

## INTRODUCCIÓN

EXISTEN DIVERSOS TRABAJOS QUE ABORDAN las características pendulantes de las políticas públicas argentinas, es decir, la ausencia de las denominadas políticas de Estado. Con todo, hay casos que son excepción. Algunos autores identifican la cuestión de las Malvinas y la integración como políticas con características de continuidad a partir del proceso de restauración democrática, incluso reconociendo que las acciones delineadas en el marco de tales políticas difieren ostensiblemente de gobierno a gobierno.

A diferencia de otras políticas, sostenemos que la política minera se caracteriza por su continuidad desde la década de 1990, y esta persistencia no sólo atraviesa partidos políticos de distinto signo político en el gobierno nacional, sino que existe una suerte de acuerdo interpartidario que se ha podido evidenciar en la actividad legislativa y en las políticas provinciales. A esto denominamos la excepcionalidad minera.

Para dar continuidad a esa política, se pergeñó desde el Congreso Nacional un paquete legislativo que hace posible: la sesión del dominio útil de las minas por parte del Estado a los privados, que son los únicos que pueden explotarlas; plantea una legislación ambiental propia que excluye a la Secretaría de Ambiente de la Nación como autoridad de aplicación —en la mayoría de las leyes mineras—; supone una serie de beneficios fiscales por treinta años que no han podido modificarse puesto que la propia Corte Suprema de Justicia falló a favor de las empresas en los casos en los cuales

se intentó transformar tal estatus; contempla la creación de espacios supranacionales, como el área de explotación del proyecto Pascua Lama entre Argentina y Chile, y la obtención de beneficios en concepto del regalía del orden de 3% como máximo (dependiendo de la provincia donde se extraiga y del puerto del cual salga el mineral puede ser menor) donde dicho porcentaje se calcula sobre la base de una declaración jurada que la propia empresa presenta sin posibilidades de comprobar la efectiva cantidad extraída.

Estas son sólo algunas condiciones que han determinado el debate en la Argentina, el cual ha tendido a polarizar a actores políticos de distintos sectores, así como a los actores subnacionales (estados provinciales y municipios) y no gubernamentales. La complejidad del tema se profundiza en función de las aristas ambientales de la actividad en general, así como escudriñando algunos casos paradigmáticos.

Los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, en su documento “Minería en números”, muestran el crecimiento exponencial de la actividad en la Argentina en la última década. Los datos muestran un crecimiento de 434% en las exportaciones (3056 millones en 2002 y 16310 millones en 2011); un aumento de 3311% en los proyectos (18 proyectos en 2002 y 614 en 2011); un acrecentamiento de los metros explorados de 664% (135000 metros en 2002 y 1031600 metros en 2011); una progresión de la inversión en 1948% (541 millones invertidos en 2002 y 11.078 millones invertidos en 2011); y un ascenso de la producción de 841% (3365 millones producidos en 2002 y 31652 millones en 2011). Al incremento demostrado en las estadísticas oficiales, Svampa y Antonelli denominan “reprimarización de la economía”.<sup>1</sup>

A pesar de que el debate acerca de las regalías y los beneficios fiscales se ha llevado gran parte de la atención gubernamental y del espacio jurídico argentino, existen otros asuntos que son de relevancia primaria. La contaminación de los suelos, las aguas y el aire, así como la modificación de la propia morfología de la Cordillera de los Andes, son sólo algunos rasgos.

<sup>1</sup> Svampa, Maristella y Mirta Antonelli, *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2009, p.19.

Los llamados gobernadores mineros y sus ministros plantean que el país ha sido siempre una nación extractora, basándose en discursos de Domingo Faustino Sarmiento y escritos que explican que la actividad minera es tan antigua en el país como lo es la agricultura, con la que tanto contienden.<sup>2</sup> La diferencia radica en que no se encuentra en discusión la explotación de rocas de aplicación y recursos no metalíferos que han generado materia prima para el mercado interno. Lo que se contiene es la gran minería metalífera orientada a los mercados externos, basada en el alto precio internacional del oro, las buenas condiciones geológicas de los yacimientos, la legislación benevolente, el acuerdo político provincial y nacional y la compra de voluntades con todo tipo de dádivas a los vecinos para lograr la denominada Licencia Social a manos de los consorcios. Sin ésta, el Banco Mundial no otorgaría los créditos que muchas de las empresas solicitan para realizar los emprendimientos.

A partir de lo dicho, analizamos la política minera en la Argentina a la luz de elementos tales como: el *discurso político* de funcionarios de primer nivel; los cambios experimentados en el terreno *legislativo*; las modificaciones en la *estructura burocrática*; las *pujas interburocráticas*, así como las oscilaciones de las *agendas políticas*. Estos elementos constituyen, desde nuestro punto de vista, una forma de demostrar no sólo nuestra postura relativa a la minería como política de Estado; también revelan que la profundización del modelo nacional y popular del kirchnerismo no ha contradicho sino profundizado un modelo que presenta una lógica de neo-extractivismo progresista pero también de extractivismo clásico siguiendo a Eduardo Gudynas.

El periodo que se estudia en este caso se extiende entre 2002 y 2012, la década en la cual la minería metalífera ha tenido un crecimiento exponencial en el país.

<sup>2</sup> Esto se comprueba con las actas taquigráficas de ambas Cámaras del Congreso, y fundamentalmente haciendo referencia a los discursos del entonces legislador y hoy gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien fue además artífice de gran parte de la legislación minera junto con su hermano César Gioja.

## 1. EL APOYO GUBERNAMENTAL BRINDADO A LA ACTIVIDAD MINERA DESDE EL PLANO DEL DISCURSO

El avance de la minería metalífera se ve en los números; tuvo un vuelco en la actividad en 1999 con la producción de la mina Bajo La Alumbraera, radicada en la provincia de Catamarca. A pesar de la oscilación detectada en el año 2000 como producto de la disminución en el precio internacional del oro, la producción metalífera ha seguido en aumento. Si bien los precios internacionales son un importante factor a la hora de establecer la factibilidad de un proyecto de esta envergadura, la caída del precio del oro decidió la parálisis de algunos proyectos en la Argentina, a partir de 2004 esta tendencia comenzó a revertirse. Ayudó que la devaluación que el gobierno de Eduardo Duhalde causó propiciara costos internos bajos, lo que benefició a los inversionistas foráneos en sus intentos de recomenzar las tratativas para los proyectos en carpeta. En este marco comenzó la explotación de la mina Veladero en San Juan, que emprendió sus operaciones en septiembre de 2005.

Además de un factor externo como el precio internacional del oro, que repercutió en forma directa sobre los proyectos y prospectos nacionales, existen elementos de índole más doméstica que procedemos a analizar. Hemos dicho que la política minera se ha caracterizado por su continuidad en el tiempo así como por contar con la venia de diferentes partidos políticos desde el Poder Ejecutivo y Legislativo nacional, así como los gobiernos provinciales. Este consenso de fuerzas en el interior de la Argentina, que se diseñó en los noventa pero tuvo su principal desarrollo en la década que se extiende entre 2002 y 2012, es visto a través de sus elementos discursivos, legislativos, así como en términos de los cambios sucedidos en las estructuras burocráticas y la denominada agenda política.

A pesar de la restricción en el contenido de la agenda política en el periodo que se extiende desde la asunción de Néstor Kirchner hasta las elecciones legislativas de medio término de 2005 –debida a la negociación de la salida del *default* y de la deuda argentina, fundamentalmente con los organismos internacionales luego de la debacle de 2001-2002–, es evidente el renovado interés en el

desarrollo de la actividad minera. Así lo revelan no sólo los números que hemos mencionado, sino las constantes y elocuentes referencias discursivas del Presidente, así como de funcionarios clave. La primera alocución a la que hacemos referencia sucedió la presentación del Plan Minero Nacional en 2004. Allí Kirchner afirmó:

El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del noventa, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina. [...] Por eso nosotros creemos y estamos dispuestos a ver un crecimiento fuerte del sector, apoyarlo fuertemente y a su vez escuchar qué políticas activas desde el Gobierno Nacional podemos promocionar para que evidentemente esto se agilice, la inversión sea más rápida y la dinamización del sector ayude a consolidar el proceso de crecimiento que la Argentina necesita para realmente colocarle un punto de inflexión a la crisis que nos tocó vivir.<sup>3</sup>

Este discurso podría colisionar con diversos aspectos del modelo construido desde 2003 por las administraciones del Frente para la Victoria; principalmente con su crítica férrea al modelo neoliberal de la década de 1990 del cual participó la actividad minera. En este sentido, concordamos con Eduardo Gudynas<sup>4</sup> y su aporte relativo a los actuales modelos extractivistas en América Latina y su relación con la política neoliberal de los años noventa. El autor afirma que existe un modelo extractivista clásico que fue común en gobiernos conservadores como la Colombia de Álvaro Uribe o el Perú de Alan García. En estos casos, las empresas transnacionales ostentan un rol determinante siendo el Estado funcional a sus inte-

<sup>3</sup> Néstor Kirchner, discurso pronunciado el día 23 de enero de 2004, disponible en <http://www.casarosada.gov.ar>

<sup>4</sup> Eduardo Gudynas, "Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 237, enero-febrero de 2012, <http://www.nuso.org>

reses y apostando a que el extractivismo produzca crecimiento económico promoviendo derrames a la sociedad y reprimiendo las protestas ciudadanas. Por otro lado, establece que el llamado neoextractivismo progresista responde a la lógica de muchos gobiernos actuales en la región que se autodenominan progresistas y de nueva izquierda. Algunas medidas tomadas por estos gobiernos coinciden con las nacionalizaciones de los recursos, fundamentalmente del sector petrolero y gasífero. No obstante, estos Estados muestran una mixtura de elementos del pasado y del presente con un papel más activo que el del Estado neoliberal profundamente criticado. De esta forma, el neoextractivismo progresista se concentra en que el Estado capte mayores proporciones de excedentes provenientes de la actividad extractiva. Retomamos esta idea en breve.

Por otra parte, el alegato prominero también presenta interferencias en relación al discurso de “la política ambiental como política de Estado” inaugurado en 2006 en ocasión del conflicto surgido con el vecino país del Uruguay por las pasteras a construirse sobre el río homónimo. Allí fue cuando Néstor Kirchner se expresó ante una multitud en la ciudad de Gualaquaychú y declaró que la lucha de la ciudad se constituía en una causa nacional, y que por ese motivo se llevaría el caso ante la Corte Internacional de Justicia, demandando al Uruguay por el incumplimiento del Estatuto del Río.

Si bien el discurso ambiental se concentró en los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner y fundamentalmente durante el periodo que duró la presentación argentina ante La Haya, se trató de un discurso que el primer mandatario llevó a todos los foros internacionales en los cuales tuvo oportunidad de participar. En tal sentido se observa el caso de la IV Cumbre Mercosur-Unión Europea celebrada en julio de 2006.

Dos discursos de Cristina Fernández en este mismo tenor de apoyo matizan este aspecto. Los gestos de la primera mandataria a favor de la actividad han sido tan variados e intensos como los de su predecesor. Las fotos de encuentros con los empresarios canadienses de Barrick Gold, así como de Yamana Gold y otros consorcios similares, y los discursos, aparecieron siempre en los momentos de mayor tensión social por los emprendimientos.

Entre los encuentros de funcionarios de alto nivel de la Argentina y de representantes de las transnacionales mineras, fundamentalmente la Barrick Gold, cuentan las reuniones directas entre Cristina Fernández y Peter Munk, CEO de la empresa en 2008, abril de 2009 y junio de 2010. En este último caso, Fernández había viajado a Canadá con motivo de la celebración de la Cumbre del G20. Asimismo, en mayo de 2009 visitaron otros dos funcionarios de la empresa la Casa Rosada, y en septiembre del mismo año, cuando la presidenta viajó a Estados Unidos por la reunión del Council of the Americas, nuevamente se encontró con Peter Munk. También pueden nombrarse diversos encuentros con el gobernador Gioja, el secretario de Minería Mayoral y otros funcionarios de alto nivel con representantes de las empresas.<sup>5</sup>

En la apertura de las sesiones del Congreso Nacional de 2012, la presidenta aseveró: “Hay pueblos que tienen mucho orgullo de ser pueblos mineros y no pueden ser estigmatizados, lo cual no quiere decir que no debamos tener cuidado ambiental. Les pido que digan si hubo un Gobierno que haya hecho más obras de saneamiento ambiental [...] Es una importante fuente de recursos para las provincias, sus habitantes, para el país”.<sup>6</sup>

Por otra parte, otro de los discursos recibidos con mayor estupor por los grupos disidentes fue el ocurrido en la ciudad de Olavarría cuando Fernández dialogó con un obrero que apoyaba la minería. Allí la mandataria afirmó en relación a la instalación de una usina de carbón en Río Turbio y al proyecto de Cerro Vanguardia:

Queríamos reconvertir Río Turbio, no la queríamos minera, queríamos que plantaran ajo y que recibieran turismo, pero hubo resistencia del pueblo al ajo y al turismo [...] Logramos que se llevara a cabo una explotación donde se respetarán todos los cánones del medio ambiente. Si Cerro Vanguardia no existiera, hoy San Julián sería un

<sup>5</sup> Algunos medios donde pueden constatarse estos datos son: <http://www.argenpress.info/2010/07/cristina-fernandez-y-la-relacion-con-la.html>; [http://www.perrfil.com/contenido\\_s/2010/06/25/noticia\\_0015.html](http://www.perrfil.com/contenido_s/2010/06/25/noticia_0015.html); [http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new\\_noticia.php?noticia\\_id=407969](http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=407969); <http://www.panoramaminero.com.ar/semanal496.htm>

<sup>6</sup> Disponible en <http://www.casarosada.gov.ar>

pueblo fantasma, por eso hay que saber conocer el país en su totalidad y hay que pedirle también a las empresas el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades.<sup>7</sup>

Asimismo, son variados los discursos que podrían mencionarse del Secretario de Minería, en particular el de cierre de “Argentina Mining 2012” en la ciudad de Salta, donde expuso: “Los datos nos muestran con orgullo que se trata de una verdadera herramienta para el desarrollo. La minería ha llegado a nuestro país para quedarse”.<sup>8</sup>

Los fragmentos expuestos presentan cierto nivel de contradicción con la lógica que ha tendido a imperar en la Argentina de la última década sobre el proceso de nacionalizaciones y la defensa de los hidrocarburos en su rol de recursos estratégicos, a partir del cual la minería no se ha visto afectada. Incluso luego del anuncio de Fernández sobre la expropiación de 51% de las acciones de la empresa Repsol YPF y el consiguiente envío al Congreso del proyecto de ley, la mandataria y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, dieron señales de tranquilidad al sector minero en cuanto a que el *statu quo* de la actividad minera se mantendría. No obstante, y para que los beneficios continúen, el Poder Ejecutivo Nacional, en la figura de Mayoral, evidenció en las Jornadas “Minería le compra al país”<sup>9</sup> que es necesario que la actividad se alinee con la política sustitutiva que lleva adelante el secretario de Comercio Guillermo Moreno, incrementando la compra de materias primas e insumos en el país.

## 2. LAS ACCIONES LEGISLATIVAS QUE PROFUNDIZAN EL MODELO PRODUCTIVO MINERO

Así como durante la década de 1990 se construyó un paquete legislativo de preferencias fiscales para la minería, en el periodo aquí

<sup>7</sup> Disponible en el diario *Ámbito Financiero*, 9 de febrero de 2012, en <http://www.ambito.com>

<sup>8</sup> Disponible en el periódico *Inversor Energético*, en <http://www.inversorenergético.com>

<sup>9</sup> Disponible en <http://manoamanocadena10.com.ar/ecos-mineros/mayoral-argentina-sera-uno-de-los-cinco-productores-mas-grande-de-cobre/>



analizado recorreremos algunas acciones de esta naturaleza que por acción u omisión resultan representativas. En el estudio de los proyectos que ingresaron a la Cámara de Diputados y a la de Senadores con el objetivo de modificar el estatus minero desde alguna perspectiva, aludimos a uno de ellos puesto que tuvo como objetivo una modificación que excedía el plano fiscal. Es relevante mencionar que ninguno de los proyectos que han tendido a reducir los beneficios o cambiar la autoridad de aplicación de la actividad o el Código Minero en sí mismo, han llegado siquiera a ser tratados en el pleno de las cámaras. En la mayoría de los casos fueron bloqueados por la Comisión de Minería.

El diputado Eduardo Pollina del Bloque Socialista –representante de la provincia de Santa Fe– envió un proyecto al Congreso<sup>10</sup> en aras de modificar el Código de Minería. El proyecto establecía que la autorización de emprendimientos mineros debía ser competencia de la Secretaría de Ambiente a nivel nacional “en los casos en los que afecte potencialmente ecosistemas” o cuando el proyecto sea binacional, refiriéndose concretamente al proyecto binacional argentino-chileno Pascua Lama. En consideración del proyecto de ley, la entonces secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, recurrió en octubre de 2006 a la Cámara de Diputados y acordó con varios legisladores que los controles existentes al momento parecían diseñados a la medida de las empresas transnacionales. Como se desarrolla en el apartado relativo a las cuestiones burocráticas, Picolotti tuvo roces desde sus comienzos con el sector minero, puesto que, entre otros aspectos, demandaba que la Secretaría de Ambiente debía tener incidencia sobre los proyectos como autoridad de aplicación y no sólo la Secretaría de Minería. Esto implicaría la modificación del paquete legislativo minero, así como del mismo Código de Minería, el cual, asentado en una interpretación del artículo 124 de la Constitución Nacional, argumenta que esto sería contradictorio con el dominio originario de las provincias relativo a los recursos naturales.

<sup>10</sup> Trámite número 113 del 18 de agosto de 2006, expediente 4707-D-2006, disponible en <http://www.hcdn.gov.ar>

El clima cada vez más caldeado para la minería a gran escala se vio lacerado con las acciones del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien a lo largo del periodo 2006-2008 profirió una serie de declaraciones proclives a detener la megaminería. En esta ocasión, solicitó a Picolotti y a Mayoral que investigaran el desempeño de las grandes empresas mineras que estaban realizando donaciones a escuelas y hospitales en los sitios donde pretendían instalarse “haciendo una captación indirecta de voluntades y limitando la opinión”.<sup>11</sup> Incluso la empresa Barrick Gold se convirtió en 2007 en el principal patrocinador del equipo de fútbol San Martín de San Juan, que pasó a primera división en dicho momento.

Con todo lo dicho, y a pesar de los embates que recibió la actividad en este periodo por la opinión pública, durante 2007 Mayoral envió al Congreso un nuevo paquete de beneficios fiscales, tales como: la prórroga en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las inversiones relacionadas con la puesta en marcha del proyecto (extensión de la ley 24.402) y la rebaja en las retenciones a los boratos en 5%.<sup>12</sup>

Por otra parte, al asumir su primera gestión, Cristina Fernández propuso un incremento que finalmente fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en virtud de la estabilidad fiscal por treinta años de la que gozan los inversores por la ley 24.196. Dicho debate sobrevino no sólo en el marco del inicio del conflicto con el campo por el incremento en las retenciones agrícolas, sino por el aumento del precio del oro cercano a los 850 dólares en la discusión acerca del derecho de las empresas a percibir esta renta extraordinaria.

Esto no impidió que, sin modificar el régimen de preferencia que tiene la actividad, se realizasen ciertos ajustes. Entre ellos: la implementación de derechos de exportación desde 2007; la obligación

<sup>11</sup> Ampliar en “En San Juan quieren involucrar al gobierno”, *La Nación*, Política, 11 de septiembre de 2006; “El oro y el cianuro el eje de nuevos conflictos políticos”, *La Nación*, Política, 16 de abril de 2007, disponibles en <http://www.lanacion.com.ar>

<sup>12</sup> “Amplían los beneficios fiscales para la minería”, *La Nación*, Económica, 9 de octubre de 2007, disponible en <http://www.lanacion.com.ar>

de liquidar divisas provenientes de las ventas en el exterior en el mercado local mediante el decreto 172/2011; los límites generalizados a las importaciones de febrero de 2012 que retrasan ingresos de máquinas y partes; la presión inflacionaria; el debate relativo a la repatriación de dividendos; y el aumento de la provisión local de bienes y servicios para las empresas mineras.

Estos ajustes no modifican el estatus de preferencia del sector puesto que sólo se ha requerido hasta ahora que la minería contribuya con los lineamientos macroeconómicos gubernamentales centrados en el control de las divisas y la política comercial. Se trata de decisiones pragmáticas económicas y no de un abandono del modelo minero. Para que exista una verdadera búsqueda de transformar la estabilidad fiscal minera será necesario modificar fundamentalmente el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras 24.196/93; al igual que el Acuerdo Federal Minero, ley 24.228/93; la ley de reordenamiento minero 24.224/93; la ley de financiamiento y devolución anticipada del IVA, 24.402/93; la ley de actualización minera, 24.498/95; la ley de ampliación del régimen de inversiones, estabilidad fiscal, inversiones de capital y exenciones, 25.429/01; y una serie de decretos que convalidan las capacidades otorgadas a los consorcios que deciden explotar un yacimiento en la Argentina.

Esta afirmación continuista en torno al modelo minero se reafirma al comprobar que la repatriación de dividendos mineros ha excedido por mucho la inversión extranjera directa en el país, lo que tiende a profundizar el déficit de divisas.

Por otra parte, se trata de un debate sobre pragmatismo económico puesto que nadie cuestiona desde la cúpula presidencial ni desde la Secretaría de Minería el modelo productivo minero, la megaminería tóxica o sus efectos sobre el ambiente.

Otra aspiración legislativa es el denominado “Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Ambiente Glaciar y Periglaciar” introducido por la legisladora Marta Maffei y defendido por el diputado Miguel Bonasso. El mismo obtuvo unanimidad de ambas Cámaras del Congreso y fue enviado al Poder Ejecutivo tal como establece la Constitución Nacional para su concreción como ley nacional. No obstante, el veto presidencial junto con el proceso

antirreglamentario que se instrumentó posteriormente –relacionado con la vuelta del proyecto por comisiones por las que no había pasado previamente– denotaron el respaldo del Poder Ejecutivo al modelo minero y particularmente a las quejas de la empresa Barrick Gold Argentina, cuyos intereses se veían directamente amenazados por la posible ley.

Entre los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo en el Decreto de veto 1837/08 se encontraba que:

– La gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino se encuentran en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso.

– El establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar, pudiendo éstas establecer parámetros más rígidos aún, de acuerdo a su especial situación ambiental.

– Que la prohibición de actividades descrita en el referido artículo 6° del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, lo que implica la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas.

Los argumentos se encuentran centrados en cómo la norma excede la delimitación constitucional en términos de funciones atribuidas a la Nación y aquellas que las provincias retienen en términos ambientales. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) argumenta que las provincias mineras estarían preocupadas porque esta ley excede lo que se espera de una norma de presupuestos mínimos; en otras palabras, que sería demasiado restrictiva y por ende podría afectar su desarrollo económico. Estas aseveraciones atienden a lo que efectivamente se comprende por desarrollo, tal como quedó manifiesto en uno de los discursos mencionados de Mayoral, es decir un modelo extractivo que mira hacia los mercados internacionales y su fijación de precios.

Tras haberse vetado el proyecto, se abrió un fuerte debate en el Congreso Nacional acompañado por una serie de proyectos alternativos que en algunos casos chocaban con la legislación preexistente. Al final, luego de proyectos de organizaciones no gubernamentales y bloques diversos, el que logró mayor consenso fue el presentado por el senador oficialista Daniel Filmus. La ley sancionada el 30 de septiembre de 2010 se denomina “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciario”. La misma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo el 1 de marzo de 2011 mediante el decreto 207.

Entre las ventajas de haber logrado esta ley finalmente propiciada a expensas del Poder Ejecutivo –a pesar del veto– se encuentra el acallamiento de las organizaciones y partidos que aseveraban que el gobierno nacional, al igual que el gobierno de San Juan, propendían al favor del consorcio más que a la preservación de los glaciares como reservorios de agua dulce. Asimismo, uno de los elementos notables del decreto reglamentario fue que nombró a la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la ley 26.639. Si bien esto pareciera lógico por la naturaleza de la norma, no ha sido así con aquellos temas que enlazan a la minería y al medio ambiente. Esta ley es, a nuestro entender, una conquista de aquellos que se opusieron al modelo minero prevaleciente y lograron que aun con modificaciones en relación con el proyecto original, la ley actual restrinja la total discrecionalidad de los gobernadores mineros. Justamente porque ocurre esto, el debate no finalizó con la reglamentación de la ley.

En atención a este último punto, el consorcio minero Barrick Gold Argentina, junto con una serie de entidades mineras –Asociación Obrera Minera Argentina, la Confederación General del Trabajo Regional San Juan, la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Servicios Mineros– realizaron presentaciones judiciales contra el Estado Nacional declarando la inconstitucionalidad de la norma. Los damnificados comprendían que la misma fue sancionada en incumplimiento del artículo 81 de la Constitución Nacional, que prohíbe a la Cámara que opera como Revisora en el Congreso modificar un proyecto –supresión del artículo 17 que prohibía autorizar nuevos

proyectos hasta que no se terminara el inventario de glaciares del IANIGLIA<sup>13</sup>-. Asimismo, afirmaban que los artículos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º y 15.º violaban sus derechos de exploración y explotación minera, con que se vedaba el desarrollo de nuevas actividades, sometiénolas a una nueva auditoría, autorización previa de la Secretaría de Minería de la provincia de San Juan. En consecuencia, solicitaron una medida cautelar de no innovar sobre los citados artículos, la cual fue concedida por un juez federal para el proyecto Pascua Lama.<sup>14</sup>

El caso llegó en junio de 2011 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La provincia de San Juan solicitó participar como tercero –litisconsorte–, tomando como fundamento los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, así como la Ley General de Ambiente 25.675, la Constitución Provincial y otras disposiciones, lo cual le fue concedido. No corrió la misma suerte la Fundación de Ciudadanos Independientes (FUCI), asociación civil que a pesar de haber invocado el artículo 41 de la Constitución fue impedida de participar como tercero. Lo interesante de los motivos esgrimidos por la CSJN fue que no se trataba de una causa donde estuvieran involucrados la protección del ambiente o la reparación ambiental, sino los derechos de las empresas que actuaban como autoras.

La CSJN declaró su competencia originaria para entender en asuntos de inconstitucionalidad, corrió traslado de la demanda al Estado Nacional con un plazo de sesenta días, denegó la intervención de la FUCI y corrió traslado por tres días a las empresas por el recurso de reposición de la medida cautelar.

Otro de los argumentos esenciales a mencionar es que la provincia de San Juan, en el marco del debate parlamentario de los proyectos mencionados, tomó la rápida iniciativa de sancionar una

<sup>13</sup> El artículo quinto de la ley estableció que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) sería el encargado de realizar el Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial junto con la autoridad de aplicación.

<sup>14</sup> María del Pilar Bueno, “Agua dulce, minería y sociedad. El caso Pascua Lama y las políticas públicas argentinas”, *Revista Relaciones Internacionales*, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, 2011, núm. 41, pp. 55-71.

ley provincial de protección de glaciares, la ley 8 144 del 14 de julio de 2010. La misma tuvo por objeto crear un inventario provincial de glaciares.<sup>15</sup> Esta norma pretendía actuar como el “techo” de protección ambiental que constitucionalmente le compete a las provincias, mientras que los presupuestos mínimos corresponden a la nación.

Luego de más de un año de parálisis de la ley con motivo de los cuestionamientos y presentaciones legales de los principales actores mineros (tanto provincias como empresas), la CSJN falló a favor de la vigencia de la ley limitando las actividades mineras desde las zonas periglaciares. Esto significa que el alto tribunal revocó las medidas cautelares presentadas por los interesados y dio paso a la creación del Inventario Nacional de Glaciares. En cuanto a las repercusiones, los principales opositores y los legisladores que participaron de la realización del primer y segundo proyectos, destacaron la labor de la Corte, mientras que las mineras y los gobernadores mineros anunciaron que continuarían la ofensiva legal. El Fiscal de Estado de la provincia de San Juan, Guillermo De Sanctis, planteó que la CSJN sólo se expidió sobre un asunto y resta la cuestión de fondo vinculada a la inconstitucionalidad de la norma. Esto significa a su entender que la Corte no dictaminó que cese la actividad en la provincia. Sin embargo, el fallo claramente establece que la medida cautelar presentada por un juzgado de San Juan “no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”, puesto que “el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes”.<sup>16</sup>

Lo afirmado por el fiscal es preocupantemente cierto pues en tanto que una nueva medida cautelar no interrumpa las actividades en la Cordillera de los Andes, y que el inventario se demore más de lo que ya se ha prorrogado, lo que habrá para proteger será cada vez menor y, aún peor, ni siquiera sabremos qué hemos

<sup>15</sup> Consta en <http://www.nuestrosglaciares.com>

<sup>16</sup> Disponible en el diario *Perfil*, 3 de julio de 2012, <http://www.perfil.com>

perdido. Lo cierto es que el proyecto Pascua Lama, objeto en gran parte del esfuerzo legislativo mencionado, ha continuado su avance del lado argentino. En la actualidad, el proyecto se encuentra paralizado del lado chileno como producto del rechazo de la Corte de Apelaciones de Copiapó a la solicitud del consorcio Barrick Gold sobre revertir una orden de no innovar del tribunal. La decisión de la Corte se produce a raíz de un recurso de protección presentado por las comunidades diaguitas que alegan que los trabajos realizados afectan las reservas de agua del Valle del Huasco.<sup>17</sup>

### 3. LA ESTRUCTURA BUROCRÁTICA Y LOS ROCES ENTRE FUNCIONARIOS POLÍTICOS POR EL *STATU QUO* MINERO

De acuerdo con lo afirmado hasta aquí y en referencia al plano de la estructura burocrática, obsérvese la jerarquización institucional de la Secretaría de Minería, que se convirtió en Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante el mandato de Néstor Kirchner, lo que logró una mayor asignación presupuestaria. Asimismo, la elección de un funcionario sanjuanino como cabeza de la agencia desde el año 2007, Jorge Mayoral.

Por otra parte, el arribo de Romina Picolotti a la Secretaría de Ambiente en 2006 como resultado del discurso pro ambiental de Kirchner tanto en el plano doméstico como externo,<sup>18</sup> fue el puntapié para una serie de roces interburocráticos entre las agencias del Ejecutivo y especialmente entre los propios secretarios. La cuestión relativa a las autoridades de aplicación de las normas mineras ambientales, así como respecto a proyectos específicos, trajo mucho debate entre las agencias. Puesto que la actividad minera tiene normas ambientales propias que exceden a la Secretaría de Ambiente

<sup>17</sup> Véase <http://www.cnnchile.com/noticia/2013/04/10/obras-de-pascua-lama-fueron-paralizadas-por-la-corte-de-apelaciones-de-copiapo>

<sup>18</sup> María del Pilar Bueno, "Pasteras: de la política doméstica a la política exterior en clave ambiental", en *El presente internacional de Argentina: cuestiones de su agenda de política exterior*, Río Cuarto, Ateneo de Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2007, pp. 121-187.



colocando a la Secretaría de Minería y fundamentalmente a los Estados provinciales como autoridades de aplicación de las mismas, esto despertó resquemores de algunos de los funcionarios que ocuparon la Secretaría Ambiental desde 2003.

La extracción de los funcionarios que ocuparon la secretaría y el momento en el cual fueron elegidos determinaron que las acciones que intentaron llevar a cabo fueran muy diferentes, y en algunos casos hasta colisionaran con la política minera, como fue el caso de Picolotti. Cuando asumió su gestión, Picolotti construyó una unidad de minería que fue desbaratada en pocos meses. Los proyectos que la alentaron para dar a luz esta unidad fueron Famatina en La Rioja y Pascua Lama en San Juan.

En el mismo año que Picolotti ingresó a la secretaría, sostuvo una reunión con el canciller Jorge Taiana; solicitó la participación de su área junto con la de minería y cancillería en las negociaciones mineras con Chile. Entre los móviles del pedido se encontraron los sucesos de Gualeguaychú y la oleada de protestas en distintos puntos del país en contra de la gran minería a cielo abierto. Uno de los argumentos más poderosos que mantuvo la secretaría en dicho encuentro fue que así como en Chile el caso Pascua Lama era abordado en forma tripartita, es decir por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el área de Minería y por la Cancillería, de igual forma debía concebirse de este lado de la Cordillera. En consecuencia, las dos expectativas de Picolotti eran: lograr un asiento para su área en las negociaciones y que cada país hubiera solicitado un Estudio de Impacto Ambiental para un mismo proyecto, lo cual había despertado resquemores y suspicacias en cuanto a las diferencias en sus contenidos. Cuando la funcionaria notó que su empresa era infructuosa, diagramó una estrategia centrada en negociar provincia por provincia los términos ambientales de cada proyecto. De esa manera se logró suscribir acuerdos con las provincias de La Rioja y San Juan. En términos prácticos, los mismos no reflejaron cambios ostensibles, puesto que para que la Secretaría de Ambiente tenga un rol efectivo es necesario modificar el Código de Minería.

No obstante, en agosto de 2006 Picolotti cometió un error estratégico por el cual debió pagar un alto costo político: se expresó

ante los corresponsales del periódico *Ámbito Financiero*,<sup>19</sup> respecto a la prioridad que la minería a cielo abierto tendría para la Secretaría de Ambiente. Esto acarrió que el gobierno rechazara las declaraciones y las Cámaras Empresariales de San Juan y el secretario de Minería Mayoral realizaran manifestaciones contrarias a sus afirmaciones. Incluso Mayoral se reunió con el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y otros gobernadores de provincias mineras, quienes realizaron una afirmación pública respecto a las atribuciones que le confiere a las provincias el artículo 124 del texto constitucional respecto a los recursos naturales.

Otra cuestión vinculada a las agencias burocráticas es la compartimentación de los espacios burocráticos con el objetivo de limitar la posibilidad del conflicto. Tras lo sucedido con el caso pasteras y particularmente en la ciudad de Gualeguaychú, había un temor en la élite política de que se repitiera un caso de disputa ambiental –en este caso con el vecino país de Chile y con la participación de una variedad de actores subnacionales y no estatales. Para evitar su advenimiento, se decidió limitar las decisiones a unos cuantos actores de primera línea. Es por eso que en mayor medida el debate se dio entre Mayoral, Picolotti y Gioja. No obstante, en este caso, no eran las relaciones con Chile las que debían salvaguardarse, puesto que las mismas estaban amparadas detrás de una negociación que desde el principio se centró fundamentalmente en aspectos meramente impositivos del proyecto. Más bien, se ponía en peligro la desacreditación interna de un modelo minero que ha ido creciendo en adeptos y en beneficios durante todo el periodo analizado. Como resultado, se tendió a compartimentar más la cuestión minera siendo únicamente discutida en el área económica de Cancillería y en la Secretaría de Minería. La justificación fue que el acuerdo que nutre los posteriores documentos relativos a Pascua Lama, es decir el Acuerdo de Complementación Económica entre la Argentina y Chile, firmado en 1991, tiene una naturaleza eminentemente económica, conque debe ser discutido desde esta arista.

<sup>19</sup> “Maná sobre Catamarca por precio del Cobre”, 8 de agosto de 2006, en <http://www.ambito.com>

#### 4. LA MINERÍA EN LA AGENDA POLÍTICA ARGENTINA

La agenda es un concepto que ha sido crecientemente discutido por los académicos con algunos puntos de desencuentro respecto a lo que efectivamente significa. Uno de los debates está dado por la diferencia entre la agenda pública y la agenda política, fundamentalmente anclado en las discusiones desde la ciencia política.

En función del objeto de estudio, no precisamos profundizar este aspecto, simplemente comprendemos a la agenda política como un espacio creado o construido por un conjunto de actores en función de sus propios intereses y percepciones acerca de las prioridades que se dan en el país, así como respecto a sus roles y objetivos dentro de la estructura burocrática. El contenido de la misma está dado por temas o asuntos que son considerados relevantes en función de este doble interés, el propio y el colectivo.

Con esto, asumimos que la cuestión minera ha formado parte de la agenda política durante todo el periodo seleccionado, en un espacio de mediana relevancia aunque ascendiente y fundamentalmente como producto de la negociación emprendida por los principales actores mineros, es decir las empresas transnacionales, los gobernadores mineros y las organizaciones sindicales y cámaras que aglutinan a empresarios nacionales que proveen insumos a las mineras. Sin embargo, la minería no ha sido un tema presente en la agenda de los medios de comunicación ni en lo que podría denominarse la agenda social hasta el periodo bajo estudio. Ambas se encuentran profundamente vinculadas puesto que el tema surgió en la agenda de los medios cuando los actores no estatales lograron una visibilidad relativa en sus acciones en contra de proyectos específicos como Pascua Lama, Famatina, La Alumbrera, Veladero y muchos otros. El crecimiento exponencial de la actividad luego de 2002 y fundamentalmente tras 2004 dio lugar al nacimiento de un movimiento ciudadano por el “no a la mina” que en una condición desigual en relación a sus adversarios, comenzó a bregar por desbaratar proyectos en sus territorios de origen. Esta condición desigual se basa en su escaso acceso a los medios locales y tanto más a los nacionales, así como a la persecución de la que son objeto por parte de los actores favorables a los emprendimientos, tal como lo han denunciado.

Así, instalar el tema en la agenda política ha tenido distintas aristas o intentos. Por un lado hubo y hay un esfuerzo de cabildeo constante por parte de los consorcios transnacionales, los empresarios mineros, las Cámaras y los gobernadores mineros por lograr que el Poder Ejecutivo en conjunción con el Legislativo, asignen prioridad a la actividad y protejan al sector económicamente mediante el mantenimiento de lo que vimos como el *statu quo*. En este caso, se trata de un lobby relativamente silencioso. Sin embargo, a partir de la irrupción de los actores sociales y el intento por acallarlos para que no promovieran una imagen negativa de la minería metalífera a gran escala, desnudó dicho cabildeo haciéndolo más audible a la opinión pública. Desde nuestro punto de vista, la acción de las organizaciones no gubernamentales y las asambleas en contra de la gran minería obligaron a actores como Gioja y Mayoral a hacer explícito su rol de lobistas. De esa manera, la búsqueda de instalar el tema en la agenda política ha tenido lados disímiles que por su confluencia dieron resultados inesperados. La actual ley 26 639 es un ejemplo en tal sentido. Difícilmente Gioja o Mayoral habrían apoyado el proceso de sanción de tal ley, por eso fueron actores centrales en presionar al Poder Ejecutivo en el veto al proyecto original. Tampoco fue la ley en sí misma un objetivo de los movimientos sociales antimineros, sino que fueron sus preocupaciones recogidas por organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente legisladores que promovieron esta norma.

Con todo lo anterior queremos mostrar que la presencia y el rol de los temas en la agenda política es una construcción muchas veces inesperada y a veces no deseada de la sinergia entre actores. Posiblemente los actores a favor de los mineros habrían preferido que la cuestión siguiese pasando por desapercibida o que en caso de lograr atención de los medios de comunicación fuera con una connotación positiva hacia la actividad.

## 5. ALGUNOS ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL ANÁLISIS

La minería se encuentra hoy inserta en la agenda social y mediática argentina; movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales

son actores relevantes, con que los gobernadores mineros y el Poder Ejecutivo profundizan el discurso y las acciones pro mineras en un contexto marcado por la defensa de la industria nacional y la crítica al modelo neoliberal de los años noventa. Asimismo y paradójicamente, la política minera ha escapado al modelo productivo-extractivo que ha imperado en la Argentina en la última década.

En consecuencia, y desde nuestro punto de vista, en la Argentina gobernada por el Frente para la Victoria, tanto en su primera etapa 2003-2007, como en las posteriores presidencias de Cristina Fernández, se reconoce una lógica neoextractivista progresista que coincide con la identificada por Gudynas, donde los recursos petroleros y gasíferos son analizados en el plano discursivo y en el de las acciones como recursos estratégicos. Esto se consuma con la nacionalización de las acciones de la empresa de capitales españoles Repsol-YPF en el primer cuarto de 2012. Es de resaltar que el modelo de nacionalizaciones ha dominado desde la gestión de Néstor Kirchner hasta la actualidad, con decisiones sobre: el Espectro Radioeléctrico Nacional (2004), la empresa Aguas Argentinas (2006), la empresa Aerolíneas Argentinas (2008) y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (2008).

Por otra parte, la minería responde a una lógica de extractivismo donde priman elementos clásicos, puesto que son los intereses de las transnacionales los preponderantes, con una búsqueda marginal de incrementar los beneficios dentro de los marcos de una normativa ambientalmente flexible y fiscalmente inflexible. Es por eso que en el momento que se produjo la nacionalización de las acciones de Repsol, tanto el secretario de Minería como el jefe de Gabinete y otros funcionarios de alto nivel mencionaron que la política minera se prorrogaría en la medida que los consorcios intentaran incrementar la proporción de proveedores nacionales. Esto coincide con los lineamientos de la política comercial actual con rasgos sustitutivos. Políticas que también coinciden con la política extractivista tradicional que describe Gudynas. Con lo cual, si bien el propio Gudynas coloca a los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el segundo modelo, consideramos que esta categoría se constituye en una excepción en lo relativo al modelo extractivo minero.

## CONCLUSIÓN

A lo largo de este breve análisis hemos hecho referencia a algunas de las principales características de la política minera como política de Estado desde la década de 1990. En tal sentido, señalábamos no sólo los dos elementos que conceptualmente acompañan a una política de Estado, la continuidad en el tiempo y el consenso interpartidario, sino también la existencia de elementos como una paquete legislativo que beneficia a la actividad y le otorga características diferenciales en relación a otras. Ejemplos en tal sentido son la existencia de una legislación ambiental específica con una autoridad de aplicación diferente a la del resto de actividades productivas en el país; estabilidad fiscal por treinta años; la obtención de regalías por un monto máximo de 3% bajo declaración jurada; así como la creación de espacios supranacionales donde el Estado tanto nacional como provincial encuentran limitadas sus prerrogativas como sucede en el caso del área creada por el Protocolo Adicional relativo al Proyecto Pascua Lama, entre otras. Este proyecto es quizás un ejemplo relevante que delata la disparidad de criterios y situaciones. Conviven tanto la supranacionalidad como la soberanía en términos impositivos y normativos puesto que el consorcio presenta documentación totalmente separada a uno y otro lado de la frontera. Esto no sólo da lugar a discrecionalidades del consorcio, sino que habilita experiencias como la actual en la cual el proyecto vive una semiparálisis a uno de los dos lados de la frontera.

Asimismo, planteamos el análisis desde la perspectiva de distintos elementos tales como: el discurso político, las modificaciones en las estructuras burocráticas, los roces entre actores, las normativas nacionales y la cuestión de la agenda política en el estudio de la política minera argentina. Hemos precisado que el debate minero es un asunto complejo que tiene muchas aristas conque su análisis simplificado tiende a menoscabar aspectos centrales del mentado juego de fuerzas políticas entre actores diversos. No obstante, hemos tomado para este artículo un aspecto específico de análisis como es la política minera como política de Estado, profundizada en el periodo 2002-2012.

A partir de los ejemplos otorgados en los planos trabajados, sostenemos que el modelo de las administraciones bajo análisis coincide tanto con lo que Gudynas señala como el extractivismo clásico como con el neoextractivismo progresista. Si bien las acciones de estos gobiernos parecieran mostrar una clara tendencia hacia el segundo modelo, la actividad minera continúa comportándose como la excepción a la regla. Las acciones de nacionalización emprendidas aún no han tocado al sector, sino que en los cuatro planos estudiados la dirigencia nacional, con acuerdo del Congreso Nacional y de los gobernadores mineros, sostienen el *statu quo* minero con una orientación a los mercados internacionales y dependiente del precio internacional de los metales.

El análisis de los discursos de los legisladores y gobernadores pro mineros nos ha llevado a comprender que sembrar el temor sigue siendo una herramienta válida en las prácticas políticas contemporáneas de la Argentina, puesto que afirmar que sólo con la actividad minera un pueblo pobre y cordillerano podrá salir de su situación de subdesarrollo es un artificio. Por otra parte, es cierto que el modelo extractivista no sólo tiene a la minería como componente, el modelo de sojización como producto del alto precio internacional de los alimentos ha sido uno de los principales agentes de “desarrollo” del modelo económico actual. De esa manera, la minería metalífera a cielo abierto debe ser vista en el marco de un modelo económico y político extractivo que ha cambiado en algunos aspectos en comparación con la década de 1990, puesto que su discurso y sus acciones coinciden más con la estatización que con la privatización; y mientras que conserva sus características más distintivas, los intereses foráneos siguen siendo los que priman.

## BIBLIOGRAFÍA

*Libros, capítulos de libros, artículos y ponencias*

Bueno, María del Pilar, “Pasteras: de la política doméstica a la política exterior en clave ambiental”, en *El presente internacional de Argentina: cuestiones de su agenda de política exterior*, Río Cuarto, Ateneo de Estudios

- Internacionales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2007.
- , *De Estocolmo a La Haya. La desarticulación de las políticas ambientales en la Argentina*, Rosario, UNR, 2010.
- , “La lánguida transformación de la Política Exterior Argentina: cambio desde abajo vs. cambio desde arriba”, en Roberto Miranda (comp.), *Avances y contrariedades. La política internacional argentina en América Latina durante la salida del default*, Santa Fe, Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, 2010.
- , “Política exterior y medio ambiente en la Argentina. La influencia de los actores subnacionales y no estatales en la toma de decisiones entre 1989 y 2009”, tesis doctoral, Universidad Nacional de Rosario, 2010.
- Catalano, Edmundo, *Curso de derecho minero*, Buenos Aires, Zavalia, 1999.
- Swampa, Maristella y Mirta Antonelli, *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Biblos, 2009.

### *Informes y actas taquigráficas del Congreso Nacional*

- Actas taquigráficas de la Cámara de Diputados de la Nación, en <http://www.hcdn.gov.ar>
- Actas taquigráficas de la Cámara de Senadores de la Nación, en <http://www.senado.gov.ar>
- Business for Social Responsibility, “Informe de Minería El Desquite Esquel, Argentina”, San Francisco, agosto de 2003.
- Moori Koenig, María Virginia, “Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino”, Cepal, Serie Reformas Económicas, 1999, disponible en <http://www.eclac.org>
- Secretaría de Minería de la Nación, “Minería en números”, 2011, disponible en <http://www.minería.gov.ar>
- , “Informe de gestión minería 2002-2012”, disponible en <http://www.minería.gov.ar>



*Páginas electrónicas consultadas*

Argenpress, <http://www.argenpress.info>.

Cadena 10 de Noticias, Andalgalá, Catamarca, <http://www.manoamano-cadena10.com.ar>

Casa Rosada, <http://www.casarosada.gov.ar>

Centro de Derecho Humanos y Ambiente, <http://www.cedha.net>

Corte Suprema de Justicia de la Nación, <http://www.csjn.gov.ar>

Diario *Ámbito Financiero*, <http://www.ambito.com>

Diario de Cuyo, <http://www.diariodecuyo.com.ar>

Diario *La Nación*, <http://www.lanacion.com.ar>

Diario *Perfil*, <http://www.perfil.com>

Glaciares de Argentina, <http://www.glaciares.org.ar>

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, <http://www.hcdn.gov.ar>

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, <http://www.senado.gov.ar>

Nuestros Glaciares, <http://www.nuestrosglaciares.com>

No a la mina, <http://www.noalamina.org>

Panorama Minero, <http://www.panoramaminero.com.ar>

Periódico *Inversor energético*, en <http://www.inversorenergético.com>

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, <http://www.ambiente.gov.ar>

Secretaría de Minería de la Nación, <http://www.mineria.gov.ar>

Secretaría de Estado de Minería de San Juan, <http://www.mineria.san-juan.gob.ar>